

TODOS Y TODAS A LA HUELGA GENERAL

Secundar la Huelga General del 14 de noviembre es un acto de resistencia. La convocatoria de los sindicatos y el llamamiento de la Cumbre Social es tan necesario y urgente que se trata de convertir el paro en una verdadera Huelga Ciudadana en la que participe toda la sociedad porque toda la sociedad está afectada por este cambio de rumbo hacia el abismo que nos imponen las élites económicas con el concurso necesario de las élites políticas. Por eso las organizaciones sociales y los sindicatos estamos pidiendo a la ciudadanía que no trabaje el 14 de noviembre, pero que tampoco consuma, que no lleve a los niños y niñas a clase, que no utilice los transportes ni los servicios públicos. Hay que parar este país para que se escuche la voz de las personas.

No vamos a estar solos en este empeño. Esta es una protesta europea que va a afectar especialmente al sur de Europa que es por donde han empezado a ensayar esta nueva fórmula de contrato social basado en que el pueblo sufra recortes y restricciones para pagar la deuda que han contraído los poderosos. La huelga será europea por primera vez en la historia porque está convocada en Portugal, España, Italia, Grecia, Chipre y Malta, y vendrá acompañada por medidas de protesta en todos los países de la Unión Europea. Se trata de unir las voces de los pueblos para que las escuchen los responsables políticos de este desastre social en el que quieren convertir el viejo Continente.

Las consecuencias de ir a la Huelga General ya las podemos intuir. Perderemos un poco de nuestro salario, pero lucharemos por los derechos sociales y laborales que tanto nos ha costado lograr, pelearémos por un modelo social basado en la justicia y en

la igualdad de oportunidades, trataremos de preservar los servicios públicos que son nuestros y forman parte de nuestro salario diferido y, sobre todo, mantendremos en pie nuestra dignidad.

Las consecuencias de no ir a la Huelga General son mucho más imprevisibles porque no dependerán de nosotros y nosotros. Estarán en manos de quienes dirigen el mundo con la lógica del dinero. Sin embargo podemos aventurar que seguirán por el mismo rumbo que hasta ahora. Nos ahogarán económicamente y nos restarán libertades y derechos para convertirnos en súbditos en lugar de seguir siendo ciudadanos. Será el mayor retroceso social en el menor tiempo.

Tener un Estado de Derecho ha sido una gran conquista en nuestro país forjada con el esfuerzo, y hasta la sangre, de muchas personas. Los más mayores lo recordarán y los jóvenes tendrán que saberlo lo más pronto posible. Aunque tiene sus imperfecciones es un buen escudo contra la arbitrariedad, la injusticia, la insolidaridad, la exclusión de los más débiles. Y es ese Estado de Derecho el que cuestiona ahora el Gobierno y las políticas europeas bajo el dictado de los poderes económicos.

El Estado del Bienestar tampoco es un lujo, es una estructura que, con paciencia y constancia, también hemos construido sobre el sudor de las personas. Son nuestros impuestos dedicados al beneficio de la ciudadanía para que todos y todas podamos tener los servicios públicos que necesitamos. Los continuos recortes están devaluando estos servicios que necesitamos.

Quizá haya personas que piensen que la solución está en quedarse quietos, en no hacer nada, mientras vuelven los buenos tiempos. Pero como sindicato estamos en la obligación de rebatir

esa idea. No se logra lo que no se pelea, no se mantiene lo que no se cuida, no se recupera la dignidad perdida, no se puede protestar por lo que le sobreviene a uno por dejación o por pereza. Este es el momento de la lucha. No hay más camino y no porque queramos el enfrentamiento sino porque no nos han dejado otra salida. No quieren contestación social y buscan caminos torticeros para eludirla. Nos quitarán hasta el derecho a protestar si no lo defendemos.

Para determinar cual debe ser la posición ante la huelga basta con imaginar a una persona en el paro, sin posibilidad de apelar a la justicia porque las tasas abusivas lo hacen imposible y porque la Reforma Laboral le ha dado todo el poder al empresario, sin prestación o con una prestación mínima porque el Gobierno las reduce sin piedad, sin servicios sociales que puedan ayudar en la desgracia, con la amenaza del desahucio sobre el hogar familiar por impago del crédito hipotecario y sin una posibilidad de futuro para la familia. Nada de esto les es ajeno a millones de personas en nuestro país y, lo peor, es que seguirá ocurriendo si no ponemos remedio. Nadie está a salvo, ni siquiera los funcionarios porque son el siguiente eslabón de la trágica cadena de paro y miseria que nos tiene reservada esta política suicida en que nos han metido los poderosos.

Si crees que debes hacer algo, cuéntale a los que tienes más cerca que nuestra fuerza para salir de esta situación está en la unidad, que todas las manos son necesarias, que el futuro de nuestros hijos merece el esfuerzo y que la memoria de nuestros mayores que iniciaron la lucha nos obliga a continuarla.



Quieren impunidad, no la tendrán

Ignacio Fernández Toxo, secretario general de CCOO

Huelga General contra los recortes y la eliminación de derechos. El 14 de noviembre, el mundo del trabajo y la ciudadanía están llamados a participar en una Huelga General convocada por los sindicatos y respaldada por las cerca de 200 organizaciones que integran la Cumbre Social. Una Huelga para decir basta al interminable capítulo de recortes y eliminación de derechos sociales y laborales que afectan a trabajadores, personas en paro y pensionistas, a la mayoría de los ciudadanos. ¿Cuántos millones de parados necesita este Gobierno, cuánto debe deteriorarse la educación y la asistencia sanitaria, cuánto debe reducirse el salario de trabajadores, trabajadoras y empleados públicos, cuánta capacidad de negociación deben perder los sindicatos en el convenio y cuánta ganar los empresarios, cuántas personas dependientes deben ser olvidadas, cuánto se debe reducir la inversión en I+D+i, cuántos millones de euros más habrá que inyectar al sistema financiero y cuantos detraer del gasto social, cuántas amnistías fiscales a los defraudadores serán necesarias, cuántas subidas de impuestos que perjudican a las rentas más bajas faltan por hacer, cuántos derechos civiles y democráticos habrá que eliminar, cuántos conflictos sociales y/o laborales deberán pasar a ser tratados como conflictos de orden público, dónde está el límite para la aniquilación del Estado de Bienestar?

El Gobierno pide a la ciudadanía, a los sindicatos, impunidad para llevar a cabo este injusto programa de recortes. No la tendrá. Desde que llegó al Gobierno el PP no ha dejado de vapulear su programa electoral, cometiendo un gigantesco fraude democrático al concurrir a las elecciones con un programa y gobernar con otro. En democracia las urnas sancionan programas electorales y ofrecen legitimidad a las fuerzas políticas para gobernar. Pero si una vez en el gobierno, se rompe el contrato alcanzado con el electorado, la legitimidad solo se puede recuperar sometiendo el nuevo programa a la opinión de la ciudadanía en un referéndum. Eso también le hemos pedido el movimiento sindical y la Cumbre Social.

Es verdad que no son pocas las voces que justifican los recortes y la política de austeridad en las imposiciones de Bruselas y más exactamente, en la hoja de ruta impuesta por Berlín y la canciller Angela Merkel. Han sido los sindicatos europeos los primeros en calificar de suicida esa política, porque nos mete de lleno en la recesión y condena a la inmensa mayoría de las sociedades europeas a un progresivo empobrecimiento, que en algunos países del sur de Europa se traduce en el incremento acelerado de la exclusión y la pobreza. Pero no hay disculpa que valga. El Gobierno español es un firme defensor de las políticas de austeridad y recortes. Lo ha dicho en Bruselas y lo ha hecho en España. Incluso cuando gozaba de una oportunidad, aun en un contexto de contención del déficit público, con la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 2013, no ha dudado en recortar la inversión, sacrificar los estímulos a la actividad económica y a la creación de empleo, renunciar a una política fiscal que mejore los ingresos del Estado, rebajar las prestaciones por desempleo, en volver a congelar el salario y reducir el empleo de los trabajadores públicos, en importantes retrocesos en protección social, dependencia, servicios sociales, ayuda a la cooperación al desarrollo, al medio rural, al medio ambiente y en ratificar una política impositiva ineficaz y poco equitativa.

Hace falta otra política

Estamos cargados de razones para convocar una Huelga General. En primer lugar para exigir un cambio radical en la orientación de las políticas que se están aplicando para enfrentar la crisis, tanto en Europa como en España. Hoy sabemos que solo con austeridad no se sale de la crisis. Hoy sabemos que Grecia, Portugal e Irlanda, países que han solicitado el rescate, están peor que antes de hacerlo. Nadie puede negar que en dos

años y medio las políticas de recortes han provocado más injusticia social, más desigualdad, menos derechos y menos democracia, y no se ven síntomas de recuperación económica por ningún lado.

Con la Huelga General reivindicamos otra política que dé prioridad a la reactivación económica y a la creación de empleo, con especial atención a los jóvenes a los que se está condenando a la emigración o a la exclusión social, un verdadero lastre para el futuro del país. Exigimos el restablecimiento de las políticas sociales y del Estado de Bienestar.

Reclamamos un cambio en el patrón de crecimiento que apueste por un desarrollo sostenible y pivote en un sector industrial dinámico y competitivo, asentado en la inversión en I+D+i y en un sistema educativo que garantice, al tiempo, calidad y equidad. Igualmente exigimos la reversibilidad de la reforma laboral (no olvidar que en sede parlamentaria sigue viva la Iniciativa Legislativa Popular -ILP- por un empleo con derechos), que se refuercen las prestaciones por desempleo y se garantice la revalorización de las pensiones.

Pero además, creemos imprescindible promover la regeneración del sistema democrático, que en Europa pasa por refundar la Unión Europea a partir de la construcción de un nuevo contrato social, que avance hacia una verdadera unión fiscal, económica, política y sobre todo social. En España, la regeneración democrática pasa por exigir al Gobierno que someta a consulta de la ciudadanía las políticas que está aplicando y que no figuraban en su programa electoral.

Por todo ello, creemos que la Huelga General está plenamente justificada. Una huelga que no debe ser únicamente un conflicto laboral. Las consecuencias de las políticas que se están llevando a cabo perjudican a toda la sociedad; solo se salvan, o incluso medran con la crisis, las élites económico-financieras. La Huelga General es una tarea de toda la ciudadanía.

